



## SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés

**A23-098**

**DEMANDANTE:**

**KAROL VANESA VIDAL CORREA**

**DEMANDADOS:**

EUSEBIO ABAD JARAMILLO LONDOÑO

FEDE ASOMUNICIPIOS (DPTO DE ANTIOQUIA)

SECRETARIA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ANORI- ANT

INSPECCIÓN DE POLICÍA Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE ANORI- ANT

MUNICIPIO DE ANORI- ANT

**RADICADO:**

05001-31-05-015-2023-00001-01

**DECISIÓN:**

**DECLARA FALTA DE JURISDICCIÓN**

Link:

[23-098 \(015-2023-00001\)](#) expediente digital

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **MARÍA NANCY GARCÍA GARCÍA, MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**, y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, antes de resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la decisión emitida el 3 de marzo de 2023 mediante la cual el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín rechazó la demanda, encontramos necesario analizar un aspecto puntual que impide a esta Magistratura pronunciarse de fondo, toda vez que el conocimiento del asunto se encuentra asignado a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Veamos:

### 1. ANTECEDENTES

Pretende la demandante que se ordene su REINTEGRO, *de forma solidaria, separada o conjunta*, por haber sido despedida cuando gozaba de una *estabilidad laboral reforzada por accidente de tránsito*, con el consecuente pago de las prestaciones sociales y vacaciones causadas, el trabajo suplementario (horas extras, dominicales y festivos), la indemnización tanto por despido injusto como por despido en estado de debilidad manifiesta, y *brazos caídos*. Posteriormente solicita que se declare la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido teniéndose como empleador los demandados, invocando la figura de unidad de empresa y cuantificando como monto de lo adeudado la suma de \$530.360.555, que incluye la *reparación integral del daño irrogado* en razón a la pérdida de capacidad laboral estimada en 24.04 por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

Aduce que como trabajadora en misión **ejerció la función pública de agente de tránsito** en el municipio accionado, el cual tenía un presunto convenio interadministrativo con FEDE ASOMUNICIPIOS, cumpliendo la jornada que reseña y percibiendo el salario que refiere. Que sufrió un accidente de trabajo el 4 de junio de 2017 (cuando fue atropellada por una motocicleta), pero fue despedida sin justa causa el 31 de diciembre de 2019 sin haberle pagado la totalidad del tiempo laborado

Luego enlista las pretensiones, pero esta vez indica que:

- 1.1. Al pago parcial de salarios últimos devengados, para ejercer cargo AGENTE DE TRANSITO “desarrollar funciones preventiva, de asistencia técnica, vigilancia y control de las normas de tránsito y transporte, conforme a las normas y procedimientos vigentes”, cumpliendo una jornada laboral de 07:00 am hasta 09:30 pm de lunes a viernes, sábados de 07:00 am hasta 11:00 pm y domingos y festivos de 07:00 am hasta 02:00 am, adicionalmente a la programación previa se tendrá disponibilidad permanente para el cumplimiento de sus funciones en caso de emergencia cumpliendo una jornada, en AREA URBANA y rural Mpio Anori – Ant. desde su vinculación del 22-12-2016 hasta el 04-06-2017 (según reporte de tiempo y planillas reportadas al jefe superior, según contrato de trabajo con 1.1.1. Salario devengado mes: =\$1.704.550,33
- 1.2 Pago de subsidio de transporte entre 09-12-2016 hasta 31-12-2019 y y el tiempo anualidad prorrogada hasta 08-12-2020.
- 1.3 Pago de horas extras diurna, recargo nocturno, horas extras dominicales y festivas, causadas cumpliendo una jornada laboral de 07:00 am hasta 09:30 pm de lunes a viernes, sábados de 07:00 am hasta 11:00 pm y domingos y festivos de 07:00 am hasta 02:00 am, adicionalmente a la programación previa se tendrá disponibilidad permanente para el cumplimiento de sus funciones en caso de emergencia cumpliendo una jornada en Mpio Anori - Ant.
2. Al pago de Cesantías
- 2.1. Sobre el salario ultimo devengado \$1.450.000,00, y subsidio de transporte de \$97,032/mes, según la ley 15 de 1959 (los trabajadores que tienen un sueldo de hasta dos salarios mínimos mensuales) es decir 2 SMLVM en el año 2020 (\$877.802) = \$ 1,755,604.00
3. Interés a las cesantías
4. Prima (sobre el salario devengado en los 3 últimos meses + todos los monumentos salariales que hacen parte del salario por los dos empleadores)
5. Vacaciones (sobre el salario devengado en los 3 últimos meses + todos los monumentos salariales que hacen parte del salario por los dos empleadores)
6. Dotación de trabajo (camisa, pantalón, zapatos), 4 veces al año x 3 años.
7. El pago parcial de la Indemnización por despido injusto del art. 64 de la ley 50 del 1990 (13 años relación parcial), por siguientes años y fracción al primer año.
8. La sanción moratoria del art. 99 de la ley 50 de 1990
9. La Sanción moratoria del art. 65 c.s.t por el no pago de las prestaciones sociales no canceladas, al momento de la terminación del contrato correspondiente a 24 meses. (si hubo saldos por cancelar).
10. El pago de la Indemnización por la sanción establecida en el inciso segundo del art. 26 de la Ley 361 de 1997 consistente en 180 días de salario
11. El pago de la indemnización o reparacion integral, derivado de enfermedad profesional (accidente de trabajo) según pcl del 24.04% (perjuicios materiales y/o lucro cesante pasado y futuro).
12. El pago de la indemnización o reparacion integral, derivado de enfermedad profesional (accidente de trabajo) según pcl del 24.04% (perjuicios materiales y/o lucro cesante pasado y futuro).
13. El pago de perjuicios: Morales objetivados, Morales Subjetivados; materiales en su especie (daño emergente, lucro cesante), y fisiológicos por deformación parcial del órgano (dedo meñique izquierda).
14. Reintegro: salarios y prestaciones sociales como consecuencia del reintegro; pagos a salud y pensiones como consecuencia de este. (optativo del trabajador, no le interesa).
15. La indexación de condenas solicitadas.
16. Todo aquello que ultra o extra petitamente resultare probado, bajo el principio de prevalencia de realidad sobre la formalidad.

17. Costas y agencias en derecho

18. Todo lo que considere mi abogado pedir, sin restricción alguna, lo divino o lo humano

Tras ello señala que fue contratada el 9 de diciembre de 2016 por la Federación de Asociaciones de Municipios de Colombia, suscribiendo un contrato de trabajo a término fijo, que fue prorrogándose durante varios años, desempeñándose como agente de tránsito, siendo esta entidad quien la despidió sin justa causa el día 31 de diciembre de 2019, cuando se encontraba en trámite el proceso de calificación.

Por auto del 30 de enero de 2023, el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín ordenó la devolución de la demanda para que en el término de cinco (5) días, so pena de rechazo, se subsanaran las siguientes falencias:

-En atención a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 2213 de 2022, deberá señalar bajo la gravedad juramento, que la dirección electrónica o sitio suministrado del demandado, EUSEBIO ABAD JARAMILLO LONDOÑO corresponde al utilizado por el mismo, y así mismo informar la forma como lo obtuvo y las evidencias correspondientes.

-Deberá sacar de las pretensiones de la demanda todos los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, así como también su cuantificación toda vez que como están planteadas son confusas e ininteligibles, además, la cuantificación va en un acápite aparte.

**-Aportar certificado laboral donde conste la calidad de servidor público que ostentaba la demandante, esto si es empleada pública o trabajadora oficial.**

-Aportar la prueba documental anunciada en el respectivo acápite ya que se omitió adjuntarla con la demanda.

-Aportar el poder conferido a la abogada.

A través de memorial enviado el 7 de febrero de 2023 la parte actora presentó escrito de subsanación, el que a juicio del despacho está compuesto por 60 hojas, **omitiendo en link inserto en el mismo, donde se aprecian 898 folios**, donde figura no sólo el poder, sino además los anexos de la demanda.

Por auto del 3 de marzo de 2023 la a quo RECHAZÓ la demanda, decisión contra la cual la parte actora interpuso y sustentó recurso de apelación. Adujo la a quo que, realizado el control de legalidad del escrito de subsanación aportado dentro del término legal, **observaba que la demandante NO allegó la certificación laboral solicitada a efectos de establecer la competencia de acuerdo a la calidad de servidor público que ostentaba, sin embargo, como este no comportaba un requisito para ser rechazada, decidió pasar dicha omisión.** No obstante, otra cosa consideró frente a las pretensiones, advirtiendo que las mismas continuaban siendo confusas, por lo que al momento de desentrañar lo pretendido por la parte demandante podía inducir al operador a efectuar una mala interpretación de las mismas, por lo que para la judicatura *la parte actora no cumplió con lo planteado en el ítem exigido*, razón por la que decidió rechazar la demanda.

El recurrente aduce, en síntesis, que el juez como director del proceso debe interpretar la demanda, máxime si lo reclamado era un derecho fundamental como el derecho al trabajo y la estabilidad laboral reforzada, debiendo prevalecer la realidad sobre la formalidad.

2. CONSIDERACIONES

De acuerdo a lo normado en el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 2° de la Ley 712 de 2001, específicamente en su numeral 1°, la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y seguridad social, conoce de “...Los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente en el contrato de trabajo”.

Una mirada rápida del asunto, diría que en ello se cierne la controversia, máxime si a folio 91 del escrito de subsanación (apreciable en el archivo 03 de la carpeta conformada en segunda instancia), se aprecia el contrato de trabajo suscrito entre la aquí demandante, y uno de las accionadas, así:



**CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO A TÉRMINO FIJO**

Nombre del empleador: Federación de Asociaciones de Municipios  
"FEDEASOMUNICIPIOS"  
Representante legal: EUSEBIO ABAD JARAMILLO LONDOÑO  
Nombre del empleado: KAROL VANESA VIDAL CORREA  
Documento de Identidad: N°: 1'037.546.678  
Lugar de Residencia: N°: Calle 104 No 64 - 101 Barrio Belalcazar  
Teléfonos N°:3002998938  
Cargo a Desempeñar: AGENTE DE TRANSITO  
Salario: Un Millón Trescientos Mii Pesos (\$1'300.000)  
Término inicial del Contrato: Veinidos 22 días contados a partir del 09 de  
Diciembre de 2106.  
Fecha de Vencimiento: 31 de Diciembre de 2016.

No obstante, al margen que el escrito de demanda NO comporte precisamente un modelo a seguir, se enuncia, mal o bien, entidades de derecho público como parte resistente, llamándose a la Alcaldía Municipal de Anorí – Antioquia en calidad de presunto empleador, en atención a la naturaleza de las funciones prestadas como agente de tránsito de esa municipalidad.

Por su parte, la Jurisdicción Contencioso Administrativa, conforme a lo previsto en el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, conoce entre otros, de los asuntos que versan sobre controversias concernientes a la *relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado*, así como la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una entidad de derecho público, e incluso, los relativos a los contratos, cualquiera que sea su régimen, en los que sea parte una entidad pública o un particular en ejercicio de funciones propias del Estado. La norma que es del siguiente tenor:



“... **Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.** La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa.

Igualmente conocerá de los siguientes procesos:

(...)

**4. Los relativos a la relación legal y reglamentaria entre los servidores públicos y el Estado**, y la seguridad social de los mismos, cuando dicho régimen esté administrado por una persona de derecho público...”. (Negritas fuera de texto).

Bajo este panorama, encuentra la Sala que la demandante KAROL VANESA VIDAL CORREA, realmente discute la viabilidad de un REINTEGRO a una entidad pública en consideraciones a las funciones ejercidas como **empleada pública en su condición de agente de tránsito**, además del reconocimiento de otros haberes e indemnizaciones. Obsérvese la certificación que obra a folio 736 del plenario (archivo 03 expediente de la segunda instancia) donde se enlistan un total de 24 funciones ejercidas por la actora, entre ellas:



**EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA FEDERACION DE ASOCIACIONES DE MUNICIPIOS**

**CERTIFICA**

Que, La señora **KAROL VANESA VIDA CORREA** , Quien se identifica con la cédula de ciudadanía No 1.037.546.678 de Don Matías, Antioquia, laboró al servicio de la Federación de Asociaciones de Municipios, “**FEDEASOMUNICIPIOS**” Nit 811.032.830-6 vinculada a la planta de cargos , desde el 09 de Diciembre de 2016 hasta el 31 de Diciembre de 2019, en calidad de Agente de Tránsito, en el Municipio de Anorí, Antioquia, bajo la planta de cargos administrativos con una asignación básica mensual de Un Millón Cuatrocientos Cincuenta Mil Pesos (\$1'450.000).

Y un promedio mensual en novedades de nómina de Trescientos Mil Pesos (\$300.000)

Cumpliendo con las funciones establecidas en el manual funciones y competencias laborales de la entidad en concordancia con las que establece por ley el código Nacional de Tránsito y demás disposiciones legales vigentes sobre la materia.

1

1. Ejercer control y vigilancia en el cumplimiento de las normas de tránsito y del transporte por parte de conductores y peatones y demás actores en las vías públicas, en los horarios dispuestos por el jefe inmediato, de acuerdo con las necesidades del servicio.
2. Informar por escrito todas las violaciones a las normas de tránsito y transporte que tenga conocimiento, mediante el diligenciamiento de órdenes de comparendos y demás informes pertinentes.
3. Conocer e informar todo tipo de accidentes y casos de tránsito, levantado el respectivo informe, remitiéndolo a la autoridad competente para su estudio en el término de 12 horas siguientes a su conocimiento.
4. Ejercer el control y administración las cámaras de vigilancia de las vías públicas previa asignación del jefe inmediato. Así como informar por escrito todas las violaciones a las normas de tránsito y transporte que tenga conocimiento a través de las cámaras, mediante el diligenciamiento de órdenes de comparendos y demás informes pertinentes.

NO quiere esto decir que indefectiblemente las súplicas impetradas tengan vocación de prosperidad, sino que, una eventual condena debe ser impuesta por el juez competente, que NO es otro que el contencioso administrativo.

Téngase en cuenta en este aspecto lo estipulado en el artículo 16 del Código General del Proceso, cuando establece que la jurisdicción y competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Detectada su ausencia, el proceso debe enviarse de inmediato al juez competente. La norma es del siguiente tenor:

**“... La jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo...”**. (Negrillas fuera de texto)

A su turno, el artículo 138 de la misma codificación, señala:

**“... Cuando se declare la falta de jurisdicción, o la falta de competencia por el factor funcional o subjetivo, lo actuado conservará su validez y el proceso se enviará de inmediato al juez competente; pero si se hubiere dictado sentencia, ésta se invalidará.**

La nulidad solo comprenderá la actuación posterior al motivo que la produjo y que resulte afectada por este. Sin embargo, la prueba practicada dentro de dicha actuación conservará su validez y tendrá eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de controvertirla, y se mantendrán las medidas cautelares practicadas...”. (Negrillas fuera de texto).

Aunado a ello, para la época de los hechos aquí discutidos, 2016-2019, se encontraba vigente la Ley 1310 de 2009, *mediante la cual se unifican normas sobre agentes de tránsito y transporte y grupos de control vial de las entidades territoriales y se dictan otras disposiciones*, que en su artículo 2 se ocupó de definir lo siguiente:

**DEFINICIÓN.** Para la aplicación e interpretación de esta ley, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

**Organismos de Tránsito y Transporte:** Son entidades públicas del orden municipal, distrital o departamental que tienen como función organizar, dirigir y controlar el tránsito y el transporte en su respectiva jurisdicción.

**Autoridad de Tránsito y Transporte:** Toda entidad pública o empleado público que esté acreditado conforme al artículo 3o de la Ley 769 de 2002.

**Agente de Tránsito y Transporte:** Todo empleado público investido de autoridad para regular la circulación vehicular y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales.

**Grupo de Control Vial o Cuerpo de Agentes de Tránsito:** Grupo de empleados públicos investidos de autoridad como agentes de tránsito y transporte vinculados legal y reglamentariamente a los organismos de tránsito y transporte.  
(Subrayas propias)

Con la entrada en vigencia de la Ley 2197 de 2020, se permitió en el art. 56 que el agente de tránsito pudiese también ostentar la calidad de contratista, así:

**Agente de Tránsito y Transporte:** Todo empleado público o contratista, que tiene como funciones u obligaciones, regular la circulación vehicular y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 1310 de 2009, respecto de la carrera administrativa.

**Grupo de Control Vial o Cuerpo de Agentes de Tránsito:** Grupo de empleados públicos o contratistas que tiene como funciones y obligaciones, regular la circulación vehicular y peatonal, vigilar, controlar e intervenir en el cumplimiento de las normas de tránsito y transporte en cada uno de los entes territoriales, vinculados legal y/o contractualmente, a los organismos de tránsito y transporte.

Incluso, el Código Nacional de Tránsito, Ley 769 de 2002, en el art. 7º,

Cada organismo de tránsito contará con un cuerpo de agentes de tránsito que podrá ser contratado, como **personal de planta o excepcionalmente por prestación de servicios** para determinadas épocas o situaciones que determinen la necesidad de dicho servicio.

Actuarán en su respectiva jurisdicción, salvo que por una necesidad del servicio, un municipio o departamento a través de su autoridad de tránsito, deba apoyar a otra entidad territorial.  
(Resaltos de la Sala).

No obstante, en uno u otro evento (personal de planta o prestación de servicios) otra es la jurisdicción que debe resolver la controversia aquí suscitada, estableciendo además si en efecto el municipio accionado es o no un organismo de tránsito, o incluso, si es del caso, establecer el rol no sólo de la Federación de Asociaciones de Municipios de Colombia, sino además de la Gerencia de Seguridad Vial del Departamento de Antioquia como autoridad de tránsito a nivel departamental, quien es el Organismo de Tránsito en algunos municipios de este departamento que no cuentan con uno.

Por lo tanto, sin necesidad de más consideraciones, se declarará la falta de jurisdicción y competencia funcional y se ordenará remitir el expediente a los Jueces Administrativos del Circuito de Medellín (Reparto), para lo de su competencia, garantizándose de esta manera el acceso efectivo a la administración de justicia, así como el debido proceso para que el rigor extremo de la aplicación de los trámites procesales, no vaya en desmedro del derecho sustancial cuya declaración aquí pretende la demandante.

## 5. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### DECIDE:

**PRIMERO. DECLARAR la falta de jurisdicción y competencia funcional** en el proceso promovido por **KAROL VANESA VIDAL CORREA** identificada con la cédula de ciudadanía Nro. 1.037.546.678 contra el **MUNICIPIO DE ANORÍ – ANTIOQUIA** y otros, conforme lo expuesto en la parte motiva de ésta providencia.

**SEGUNDO: ORDENAR** el envío del expediente a los Jueces Administrativos del Circuito de Medellín (Reparto), para lo de su competencia.

**TERCERO:** Lo resuelto se notifica en **ESTADOS** y se ordena comunicar la anterior decisión al juzgado de origen.

Los Magistrados  
(Firmas escaneadas)



ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA



MARIA NANCY GARCÍA GARCÍA



MARTHA TERESA FLOREZ SAMUDIO

**CERTIFICO:** Que la providencia anterior fue notificada por  
ESTADOS No. 144 fijados hoy en la secretaría de  
este Tribunal a las 8 a.m.

Medellín 22 DE AGOSTO DE 2023

\_\_\_\_\_  
**Secretario**

CONSULTABLE EN: <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>